



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXIX - N° 1152 Bogotá, D. C., martes, 20 de octubre de 2020 EDICIÓN DE 16 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

PONENCIAS

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SENADO DEL PROCEDIMIENTO DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 169 DE 2020 SENADO

por el cual la Nación declara el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se asocia y rinde público homenaje a la Fundación Madres Falsos Positivos Soacha y Bogotá (Mafapo) y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, 28 septiembre de 2020

Presidente
JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República

Ref: Ponencia para primer debate en Senado del procedimiento del Proyecto de Ley No.169 de 2020 - Senado "POR EL CUAL LA NACIÓN DECLARA EL 20 DE SEPTIEMBRE COMO DÍA CONMEMORATIVO DE LAS VÍCTIMAS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SE ASOCIA Y RINDE PÚBLICO HOMENAJE A LA FUNDACIÓN MADRES FALSOS POSITIVOS SUACHA Y BOGOTÁ (MAFAPO) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

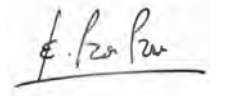
Respetado señor presidente:

Atendiendo a la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado y a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 5 de 1992 procedo a someter a consideración de la comisión el informe de **PONENCIA POSITIVA** para primer debate en Senado del Proyecto de Ley No.169 de 2020 - Senado "Por el cual la nación declara el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se asocia y rinde público homenaje a la Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO) y se dictan otras disposiciones".

El presente Proyecto de Ley cuyo objeto es que la nación declare el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y rinda público homenaje a la Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO) quienes representan la sororidad, lucha y el valor de las madres colombianas. Exaltando su compromiso con la reivindicación de la verdad, la justicia social, la reparación y las garantías de no repetición. Se autoriza al Gobierno nacional para erigir un monumento conmemorativo y desarrollar un acto especial que honre la memoria de las víctimas y ofrezca perdón a sus familiares.

Atentamente,


ANTONIO SANGUINO PAEZ
Senador de la República
Ponente Coordinador


BERNER ZAMBRANO ERASO
Senador de la República

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SENADO

Proyecto de Ley No.169 de 2020 - Senado "POR EL CUAL LA NACIÓN DECLARA EL 20 DE SEPTIEMBRE COMO DÍA CONMEMORATIVO DE LAS VÍCTIMAS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SE ASOCIA Y RINDE PÚBLICO HOMENAJE A LA FUNDACIÓN MADRES FALSOS POSITIVOS SUACHA Y BOGOTÁ (MAFAPO) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

I. TRÁMITE LEGISLATIVO

El Proyecto de Ley No.169 de 2020 es presentado por los senadores: Antonio Sanguino Páez, Jorge Eduardo Londoño, Wilson Arias Londoño, Jesús Alberto Castilla, Aida Avella Esquivel, Feliciano Valencia, Alexander López Maya, Juan Luis Castro Córdoba, Iván Marulanda Gómez, José Aulo Polo Narváez, Angelica Lozano Correa, Jorge Eliécer Guevara, Gustavo Bolívar Moreno; y los representas a la cámara: Ángela María Robledo Gómez, María José Pizarro, Abel David Jaramillo, César Pachón Achury, León Fredy Muñoz, Inti Raúl Asprilla Reyes y David Racero Mayorca; radicado en la Secretaría General del Senado de la República el día treinta y uno (31) de Julio de 2020.

El 09 de septiembre de 2020 mediante oficio CSE-CS-CV19-0169-2020 la Comisión Segunda Constitucional Permanente notifica la designación a los ponentes del proyecto; siendo ponentes coordinadores los Senadores Antonio Sanguino Páez y Juan Diego Gómez Jiménez. Los Senadores Berner Zambrano Eraso, Luis Eduardo Díazgranados Torres, Jaime Duran Barrera y Feliciano Valencia también son ponentes de la iniciativa.

Sobre este Proyecto de Ley de conmemoración a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y homenaje público a la Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO) y con fundamento en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5 de 1992 se procede a rendir **PONENCIA POSITIVA** ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente en los siguientes términos:

I. MARCONORMATIVO

Normatividad Nacional:

- Constitución Política de Colombia: 22, 70,72,95, 150.
- Ley 1185 de 2008.
- Ley 1448 de 2011: 3, 4, 23, 24, 25 y 28.
- Sentencia C-766 de 2006.
- Sentencia C-742 de 2006.
- Sentencia C-817 de 2011.

Atendiendo a lo dispuesto en el marco jurídico colombiano, el Congreso de la República, guarda una clara consecuencia con lo establecido en la Constitución Política de Colombia y el marco normativo dispuesto para tal fin.

II. CONSIDERACIONES

El Proyecto de Ley 169/2020 Senado, “Por el cual la nación declara el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se asocia y rinde público homenaje a la Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO) y se dictan otras disposiciones”, tiene como objetivo que la nación se asocie y rinda homenaje público a la Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá(MAFAPO) quienes representan la sororidad, lucha y valor de las madres colombianas. Exaltando su compromiso con la reivindicación de la verdad, la justicia social, reparación y garantías de no repetición. Por lo cual, se dispone declarar el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se autoriza al Gobierno nacional para erigir un monumento conmemorativo y desarrollar un acto especial que honre la memoria de las víctimas y ofrezca perdón a sus familiares.

El presente proyecto de ley busca dignificar la memoria de todas y cada una de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, en especial las desaparecidas en hechos ocurridos en Soacha y Bogotá, los cuales son registrados por la Fundación MAFAPo así:

NOMBRE DE LA VICTIMA	EDAD	FECHA DE DESAPARICIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
Jaime Castillo Peña	42 años	11 de agosto de 2008	12 de agosto de 2008
Jhonny Duvian Soto Muñoz	21 años	10 de agosto de 2008	12 de agosto de 2008
Mario Alexander Arenas Garzón	33 años	2 de enero de 2008	21 de febrero de 2008
Diego Armando Marín Giraldo	21 años	6 de febrero de 2008	8 de febrero de 2008
Daniel Alexander Martínez	21 años	6 de febrero de 2008	8 de febrero de 2008
Diego Alberto Tamayo Garcera	26 años	23 de agosto de 2008	25 de agosto de 2008
Hader Andrés Palacios Bustamante	22 años	23 de agosto de 2008	25 de agosto de 2008
Julían Oviedo Monroy	19 años	2 de marzo de 2008	3 de marzo de 2008
Julio Cesar Mesa Vargas	21 años	26 de enero de 2008	30 de enero de 2008
Jhonatan Soto Bermúdez	17 años	27 de enero de 2008	30 de enero de 2008
Elkin Gustavo Verano Hernández	22 años	12 de enero de 2008	13 de enero de 2008
Joaquín Castro Vásquez	27 años	13 de enero de 2008	21 de febrero de 2008
Victor Fernando Gómez Romero	23 años	23 de agosto de 2008	2 de septiembre de 2008
Daniel Andrés Pesca Olaya	27 años	23 de febrero de 2008	30 de marzo de 2008
Eduardo Garzón Páez	32 años	4 de marzo de 2008	5 de marzo de 2008
Oscar Alexander Morales Tejada	26 años	31 diciembre de 2007	16 de enero de 2008
Edwar Benjamín Rincón Méndez	19 años	21 de junio de 2004	21 de junio de 2004
Weimar Armando Castro Méndez	19 años	21 de junio de 2004	21 de junio de 2004
Omar Leonardo Triana Carmona	26 años	14 de agosto de 2007	15 de agosto de 2007
Jaime Estiben Valencia Sanabria	16 años	3 de febrero de 2008	8 de febrero de 2008
Fair Leonardo Porras Bernal	26 años	8 de enero de 2008	12 de enero de 2008

El Proyecto de Ley puesto a consideración del Congreso de la República se justifica bajo los siguientes aspectos:

Las Ejecuciones Extrajudiciales -Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado-.

casos sin información clara, 1.574 aparecieron muertos, 4.914 aparecieron vivos y 17.123 continuaban desaparecidos hasta el 2013, desde este año no se tiene una información clara⁷.

Casos de ejecuciones extrajudiciales - Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado -.

No fue sino hasta el 2008, que los medios de comunicación registraron los hechos ocurridos entre enero y agosto de ese mismo año, donde fueron reclutados, desaparecidos y posteriormente ejecutados 19 jóvenes del municipio de Soacha y Bogotá. Estos fueron encontrados en una fosa común en Ocaña y Cimitarra, Norte de Santander.

De este trágico episodio se consolidó el grupo denomina las “Madres de Soacha”⁸, quienes han evidenciado y denunciado los casos de sus hijos y familiares así⁹:

- **Jaime Castillo Peña** tenía 42 años, luego de que su familia lo buscara por varios días, Medicina Legal les informó que había sido asesinado el 12 de agosto de 2008 y encontrado dos días después en una vereda a tres horas de Ocaña, vestía la misma ropa con la cual fue visto por última vez el 10 de agosto en el barrio Álamos en Bogotá. Dos días antes, desde el CAI de Álamos le confirmaron a su hermana que Jaime se encontraba allí, sin embargo, nunca se encontró el registro de su detención.
- **Jhonny Duvian Soto Muñoz**¹⁰ 21 años de edad. Prestó servicio militar y quería ser soldado profesional, a los 5 meses de haber salido del ejército, desapareció el 10 de agosto del año 2008 y apareció muerto en Ocaña Norte de Santander el 12 de agosto de 2008 como guerrillero dado de baja en combate.
- **Mario Alexander Arenas Garzón**, de 33 años, quien trabajaba como carpintero y fue asesinado el 21 de febrero de 2008, fue encontrado en la misma fosa común de Ocaña, Norte de Santander.
- **Diego Armando Marín Giraldo** de 21 años de edad, fue presentado por tropas de la Brigada Móvil 15 del Ejército Nacional como paramilitar muerto en combate.
- **Daniel Alexander Martínez** de 21 años de edad desapareció el 6 de febrero de 2008, quien aún se encontraba en convalecencia producto de heridas con arma corto punzante a causa de un atraco el cual había sido víctima 8 días antes. Le manifestó a sus familiares que tendría un viaje por motivos laborales y volvería en los días siguientes, sin embargo, fue después de 7 meses que medicina legal les informó sobre el hallazgo del cadáver de Daniel Alexander.
- **Diego Alberto Tamayo Garcera** de 26 años de edad, se levantó muy temprano a buscar trabajo el 23 de agosto de 2008. Su mamá lo esperó todo el día y nunca regresó. El 25 de agosto fue asesinado por tropas de la Brigada Móvil XV de Ocaña y presentado como guerrillero muerto en combate.
- **Hader Andrés Palacio Bustamante** fue asesinado el 25 de agosto de 2008, con 23 años de edad su cadáver fue hallado en una fosa común en el Municipio de Ocaña.

Las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “*Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado*”, han sido definidas como:

“Ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el Ejército del Estado colombiano contra la población civil, usualmente contra poblaciones vulnerables como los campesinos, indígenas y personas movilizadas por condición de violencia. Estos actos se dan como muertes intencionadas que no se generan en medio de un combate entre las Fuerzas Armadas y grupos insurgentes, sino que tiene la participación directa o indirecta de agentes del Estado”¹.

El *modus operandi* de estas ejecuciones extrajudiciales, conocida en el caso colombiano como “*Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado*”, consistían en identificar a sus víctimas en comunidades vulnerables, como “*campesinos, habitantes de calle, dirigentes sindicales y líderes sociales, jóvenes en busca de trabajo y de zonas vulnerables, habitantes de zonas en disputa territorial, drogadicitos y trabajadoras sexuales*”². En el marco de estas acciones, la función de los reclutadores era ofrecerles un trabajo ficticio en una finca a las afueras de la ciudad, al lograr convencerlos, eran llevados y posteriormente asesinados por los militares encargados de cada zona³. Posteriormente eran vestidos de guerrilleros, para así simular un falso escenario de combate, con el fin de demostrar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional que “*se estaba combatiendo la guerrilla*” y se estaban “*obteniendo resultados militares*”⁴.

Al remitirse a las cifras, se encuentra que el dato sobre número de bajas varía según las organizaciones observadoras. “*Según el Centro de Investigación para la Educación Popular, el número de víctimas asciende a 1.613 entre 1990 y 2009. La Fiscalía, por su parte, reporta 2.799 víctimas de este comportamiento, mientras que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas habla de 3.000 víctimas entre 2004 y 2008.*”⁵ Mientras que para la “*organización estadounidense Fellowship on Reconciliation (FOR), los casos son de 6.863 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, de las cuales 5.763 fueron perpetradas entre los años 2000-2010*”⁶.

Dentro del periodo de 2002-2013, se produjeron 31.691 denuncias por desaparición, de las cuales 8.080 se reportaron como desaparición forzada y 23.611 se generaron sin información clara. De los 8.080 casos denunciados como desaparición forzada, 480 de las personas aparecieron muertos, 186 aparecieron vivos y 7.414 seguían desaparecidos hasta el año 2013. Además de los 23.611

¹ Mateo Medina, R. (2013). La Politización de la maternidad ante la impunidad en Colombia: El Caso de las Madres de Soacha. *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 8, 41-52. Pág. 42
² Centro Nacional de Memoria Histórica. (s.f.). *Cátedra de Pensamiento Colombiano: ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad*. Centro Nacional de Memoria Histórica.
³ Fiscalía General de la Nación. (2011). *Primera Instancia No. 2011-00005-00. Luis Alejandro Toledo Sánchez. Homicidio en persona Protegida y Desaparición Forzada Agravada*. Sentencia, Singelojo.
⁴ Mateo Medina, R. (2013). La Politización de la maternidad ante la impunidad en Colombia: El Caso de las Madres de Soacha. *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 8, 41-52. Pág. 42
⁵ Cárdenas, E., & Villa, E. (20de Febrero de 2013). La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales. Ensayos sobre Política Económica (31), 64-72.
⁶ Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. (Agosto de 2014). Los Falsos Positivos y el Proceso de Paz. (C. C.-E.-E. Unidos, Ed.) *Boletín de Seguimiento y Análisis de la Situación de Derechos Humanos en Colombia* (15), 1-16.

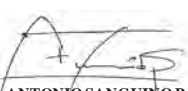
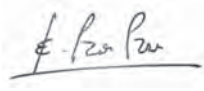
- **Julían Oviedo Monroy** su desaparición fue reportada el 2 de marzo de 2008 en Soacha y su muerte se registró un día después en Ocaña, sindicado como paramilitar dado de baja en combate.
- **Julio Cesar Mesa Vargas** de 21 años de edad fue presentado como paramilitar muerto en combate. Desapareció el 26 de enero de 2008 y su cuerpo fue encontrado el 27 de agosto de 2008. Su madre ha manifestado que su hijo “partió de Soacha con la promesa de desconocidos de recibir diez millones de pesos. Mi hijo dijo: me voy a ir a ganarme esa plata y vengo y le compro una casa a mi mamá”.
- **Jonathan Orlando Soto Bermúdez** este joven de 17 años de edad desapareció el 26 de enero de 2008 y su cuerpo fue encontrado en una fosa común en el municipio de Ocaña el 27 de enero.
- **Elkin Gustavo Verano Hernández y Joaquín Castro Vásquez** fueron desaparecidos el 13 de enero de 2008 y dos días después presentados como paramilitares dados de baja en combate. Les prometían 10 millones de pesos cuando llegaron a un lugar de la costa y luego de tres meses podrían volver a sus hogares. Sus cuerpos fueron encontrados en la misma fosa común donde hallaron 11 cadáveres de hombres desaparecidos en Soacha y Bogotá.
- **Daniel Andrés Pesca** de 27 años laboraba manejando un taxi. Residía en Bogotá y el día anterior a su muerte salió con destino a Cimitarra.
- **Eduardo Garzón Páez** con 32 años de edad, había salido de su casa en Bogotá a las 8:30am del 4 de marzo de 2008 y al día siguiente a las 2:45pm fue reportado en Cimitarra como muerto en combate y vistiendo camuflado. Su cuerpo presentaba señales de tortura.
- **Oscar Alexander Morales Tejada**¹¹ fue asesinado el 16 de enero de 2008, había salido de Fusagasugá hacia Cúcuta. Tenía 26 años de edad. Del grupo de los 19 asesinados, el cuerpo de Oscar Alexander es el único que aún no ha sido recuperado, se cree que su cuerpo podría estar en el municipio de El Copey en el departamento del Cesar.
- **Edwar Benjamín Rincón Méndez y Weimar Armando Castro Méndez** estos dos primos de 19 años desaparecieron el 21 de junio de 2004 y pareciera ser uno de los primeros registros en Bogotá de los llamados “*Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado*”. Dos días después de su desaparición se encontraron sus cuerpos en Ciudad Bolívar, vestidos con camuflados y agujerados por proyectiles. Weimar y Edward acababan de graduarse del colegio y estaban gestionando un crédito con Icetex para ingresar a la Universidad.
- **Omar Leonardo Triana Carmona** fue asesinado el 15 de agosto de 2007, con 26 años de edad, en el municipio de Barbosa Antioquia, un día después de que su madre supiera de él por última vez. Trabajaba con artesanías y se fue a Medellín a “probar suerte”.
- **Jaime Estiben Valencia Sanabria** de 16 años de edad fue reportado como guerrillero dado de baja en combate. Fue visto por última vez el 6 de febrero de 2008. El 8 de febrero sobre las 2:30pm se comunicó con una de sus hermanas, a quien le dijo que estaba en Ocaña, su registro de defunción certifica que él falleció ese mismo día.
- **Fair Leonardo Porras Bernal** fue asesinado el 12 de enero de 2008 y señalado de ser comandante guerrillero. A pesar de tener 26 años, su edad mental era la de un niño de 10 años y no tenía suficiente fuerza en su mano derecha como para cargar y disparar un arma, ya que era zurdo. Así lo demostró el expediente clínico de Leonardo durante el juicio.

⁷ Ramírez Páez, D., & Segura, J. (2013). *Comportamiento del fenómeno de la desaparición*. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Colombia: Grupo Red Nacional de Cadáveres en Condición de No Identificados y Personas Desaparecidas.
⁸ Mateo Medina, R. (2013). La Politización de la maternidad ante la impunidad en Colombia: El Caso de las Madres de Soacha. *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 8, 41-52. Pág. 43
⁹ Base de datos de víctimas silenciadas por el Estado en Colombia. Masacre falsos positivos en Soacha 2008. Recuperado el 14 de julio de 2020 de: <https://vidassilenciadas.org/victimas/37044>
¹⁰ Revista Semana. Jonny quería ser militar y terminó de “falso positivo”. Recuperado el 23 de julio de 2020 de: <https://www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/jonny-queria-militar-termino-falso-positivo/13467-3>

¹¹ Falsos positivos. Hoy hace 10 años comencé a buscar el cuerpo de mi hijo. Recuperado el 14 de julio de 2020 de: <https://semananatural.com/web/articulo/diez-anos-despues-doris-tejada-sigue-esperando-encontrar-el-cuerpo-de-su-hijo/347>

<p>- Víctor Fernando Gómez Romero de 23 años de edad fue reportado como desaparecido el 23 de agosto de 2008 y su cadáver fue hallado en una fosa común en Ocaña el 25 del mismo mes. Su madre manifestó que “Después de lavar carros todo el día, llegó desilusionado a la casa diciendo: mamita, me fue mal. Solo completé los \$12.000 del gas.” Esa fue la última vez que lo vio con vida.</p> <p>Casos como estos demuestran que las víctimas de las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” provenían de familias humildes con bajos recursos económicos que buscaban oportunidades laborales para apoyar a su núcleo familiar y los cuales un día vieron truncados sus sueños y proyectos de vida de manos de una de las instituciones llamados a protegerlos. Además de estar ubicados en el municipio de Soacha, lugar que “<i>favorece los asentamientos de personas desplazadas a consecuencia del conflicto armado, dando lugar a bolsas de gran pobreza</i>”, y con ello a un alto nivel de vulnerabilidad. Soacha hace parte de un corredor geoestratégico, siendo el paso de los grupos armados ilegales, ya que conecta a varios departamentos del país hacia el sur¹². Evidenciando la existencia en este municipio de conflictos sociales, que en la primera década del siglo estuvieron marcados por los llamados “<i>falsos positivos de los hijos de las madres de Soacha</i>”.</p> <p>Sobre estos casos, en 2017 el Juscado primero especializado de Cundinamarca condenó a 21 militares a entre 37 y 52 años de prisión. Las víctimas de esta condena son: <i>Diego Alberto Tamayo Garcera, Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez</i>.¹³</p> <p>Entre los condenados se encontraba el coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón Amado, quien era oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15 del batallón Contraguerrillas 96 en Norte de Santander y fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado.</p> <p>Se comprobó que los jóvenes llegaron el 27 de enero en la madrugada a Ocaña, que estuvieron incommunicados y encerrados todo el día y por la noche fueron llevados en moto hasta un falso retén en donde fueron entregados a militares que, dos días después, los presentaron como muertos en combate.</p> <p>Así mismo, Pedro Antonio Gámez un reclutador de los falsos positivos de Soacha fue condenado a 39 años de cárcel.¹⁴</p> <div><div></div><div>¹² Mateo Medina, R. (2013). La Politización de la maternidad ante la impunidad en Colombia: El Caso de las Madres de Soacha. <i>Revista Internacional de Pensamiento Político</i>, 8, 41-52. Pág. 43</div><div>¹³ El Tiempo (2017). Expectativa por condena militares por falsos positivos en Soacha. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/condena-contra-militares-por-falsos-positivos-de-soacha-74450</div><div>¹⁴ Semana (2018). Un reclutador de los falsos positivos de Soacha fue condenado a 39 años. Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/falsos-positivos-civiles-y-militares-condenados/557018/</div></div>	<p><i>Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO)</i></p> <p>Como ya se mencionó anteriormente, a causa de lo registrado en el 2008, se creó la Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO), integrada por madres y familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Ellas desde hace cerca de 12 años exigen sus derechos a la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y la dignificación de la memoria de sus hijos y familiares quienes injusta y arbitrariamente fueron señalados como miembros de las guerrillas y/o paramilitares y reportados como dados de baja en combate con el Ejército Nacional.</p> <p>Las mujeres que hacen parte de MAFAPo son el ejemplo de organización civil, sororidad y resistencias que conducen a la construcción de paz. Continuamente se reúnen en las plazas públicas, universidades y colegios, para denunciar la desaparición y asesinato de sus hijos, y exigir que se cuente la verdad y se haga justicia frente a estos crímenes cometidos por las Fuerzas Militares¹⁵.</p> <p>La MAFAPo ha intentado por todos los medios que el Estado responda y que las Fuerzas Militares les brinden la verdad de los hechos; no obstante, a la fecha no todas las madres y familiares de las víctimas tienen verdad y quienes la tienen, son fragmentos, podría decirse que “<i>una verdad a medias</i>”. Por esa razón las familias de estos jóvenes siguen luchando por un trato digno por parte de Estado, estas llevaban un “<i>proceso de forma individual y después de 11 años hay algunos casos en lo que no se ha celebrado ni una sola audiencia, y muchos otros que se han enfrentado a constantes prórrogas. Por eso, el 14 de septiembre de 2018, la Fundación MAFAPo presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe, en el que solicitaban garantías de seguridad para continuar trabajando en conjunto y llegar a la verdad</i>”¹⁶.</p> <p>Las principales garantías que busca la Fundación MAFAPo es el “<i>apoyo con la exención del servicio militar obligatorio de nuestros familiares, protección ante amenazas y la correspondiente citación de fiscales, abogados y funcionarios que hicieron los levantamientos de los cuerpos o asesoraron a militares implicados en ejecuciones extrajudiciales.</i>”¹⁷ Así mismo, buscan garantías de esclarecimiento de la verdad, especialmente con el caso de Oscar Alexander Morales Tejada, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado, por lo cual han solicitado priorizar el caso para que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas aborde la investigación. En el sitio en donde se cree que estaría enterrado Oscar Alexander hay más de 200 cadáveres aún sin identificar, por lo cual las Madres le han solicitado a Medicina legal agilizar los trámites, e incluso la petición fue elevada al International Commission on Missing Persons ICMp.</p> <p>En el municipio de El Copey en el Cesar, donde se encuentran estos restos sin identificar, actualmente se está iniciando un proyecto de infraestructura, por lo cual las Madres solicitan un espacio en el que puedan ser ubicados los restos que están allí. Como parte del proceso de luto y</p> <div><div></div><div>¹⁵ Centro Nacional de Memoria Histórica. (10 de Octubre de 2018). <i>Una década sin respuesta para las madres de Soacha</i>. Recuperado el 11 de Febrero de 2020, de Centro Nacional de Memoria Histórica: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica</div><div>¹⁶ Centro Nacional de Memoria Histórica. (10 de Octubre de 2018). <i>Una década sin respuesta para las madres de Soacha</i>. Recuperado el 11 de Febrero de 2020, de Centro Nacional de Memoria Histórica: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica</div><div>¹⁷ Ávila, C. (17 de Octubre de 2019). Madres de Soacha en la JEP: “Los militares no están diciendo la verdad”. <i>El Espectador</i>.</div></div>
<p>reparación, es un alivio encontrar los restos de sus seres queridos y dignificar a las miles de familias que aún están buscando a sus familiares, por lo cual este requerimiento cobra especial validez. El solo hecho de encontrar a sus seres queridos y darles sepultura es un avance en la dignificación de las víctimas.</p> <p>Varias de las Madres que hacen parte de la Fundación MAFAPo han sufrido otras violaciones a sus derechos, como el desplazamiento forzado, la revictimización o las condiciones económicas que les dificultan acceder a los servicios básicos. Su posición ha sido reiterativa frente a los crímenes de las ejecuciones extrajudiciales en la cual exponen que no están involucrados solo los miembros de la Fuerza Pública, sino otras entidades como Medicina Legal y el CTI de la Fiscalía, por las inconsistencias frente a los informes de reconocimiento de los cuerpos.</p> <p><u><i>El papel de la JEP frente a los Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.</i></u></p> <p>Por todos los casos presentados sobre estos temas y que han salido impunes en la justicia ordinaria. La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, mediante la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad viene trabajando sobre el caso 003, denominado <i>-Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado-</i>. Éste caso se abrió debido al informe entregado por la Fiscalía General de la Nación, en el cual “<i>se identificaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 % fueron hombres jóvenes entre los 18 y los 30 años. Según el informe, el fenómeno se disparó en 2002 y su etapa más crítica se evidenció entre 2006 y 2008</i>”¹⁸. Los responsables de estos actos serían miembros de la “<i>Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería “Francisco de Paula Santander”, quienes deberían responder de al menos 69 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el Catatumbo, Norte de Santander, entre 2007 y 2008, incluidas las ejecuciones extrajudiciales de 16 jóvenes en Ocaña, reclutados en Soacha, Cundinamarca</i>”.¹⁹</p> <p>La Fundación MAFAPo, le exige a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- que se respete el nombre de todos sus familiares, dado que las declaraciones de los militares, se refieren a los jóvenes como “<i>delincuentes y violadores</i>”²⁰. Durante el desarrollo de los interrogatorios las víctimas han señalado que se sienten burlados por los miembros de la Fuerza Pública, dado que se evidencia la existencia de frases comunes y repetitivas, sin cambiar el discurso revictimizante. Los familiares ven las intervenciones como un guion previamente estudiado, en el cual la mayoría de los militares acusan a sus superiores, insistiendo que todo lo realizaban por órdenes y no tenían conocimiento pleno de porqué lo hacían.</p> <p>Finalmente, “<i>dentro del caso 003 que abrió la JEP para investigar las ejecuciones extrajudiciales se priorizaron, en esta primera etapa del proceso, seis departamentos: Huila, Cesar, Meta, Antioquia, Casanare y la región del Catatumbo, donde está Norte de Santander. Hasta el momento,</i></p> <div><div></div><div>¹⁸ Moreno, J. (24 de Julio de 2018). Falsos positivos, el caso 003 de la JEP. <i>El Espectador</i>.</div><div>¹⁹ Escuela Nacional Sindical. (24 de Octubre de 2019). <i>13 familiares de las víctimas de Soacha tuvieron la palabra en la JEP</i>. Recuperado el 11 de Febrero de 2020, de Escuela Nacional Sindical: http://all.ens.org.co/noticias/13-familiares-de-las-victimas-de-soacha-tuvieron-la-palabra-en-la-jep</div><div>²⁰ Ávila, C. (17 de Octubre de 2019). Madres de Soacha en la JEP: “Los militares no están diciendo la verdad”. <i>El Espectador</i>.</div></div>	<p><i>la Sala ha escuchado 162 versiones dadas por 131 uniformados, desde soldados hasta generales.</i>”²¹ En el caso de los jóvenes de Soacha, que fueron encontrados en fosas comunes en Ocaña, Norte de Santander, la magistrada aseguró al término de la audiencia que: “<i>lo que sigue es un arduo proceso de contrastación entre las versiones de los militares, las observaciones del grupo de mujeres y sus abogados, los archivos en la justicia ordinaria y los 17 informes que recibieron sobre este fenómeno.</i>”²²</p> <p>Dentro del caso 003 la Sala de Reconocimiento de la JEP investiga las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, a partir del informe No.5 de la Fiscalía. Este informe indica que hubo un total de 2.248 víctimas, entre 1988 y 2014. Se puede evidenciar, que este fenómeno tuvo un aumento significativo a partir del año 2002, y tuvo su etapa más crítica entre 2006-2008. A continuación, se darán las cifras presentadas en el caso:</p> <ul style="list-style-type: none">- El CINEP aportó a manera de informe las Revistas Noche y Niebla, en las que se cuentan al menos 1741 casos de ejecuciones extrajudiciales (entre 1984 y 2011).- Después de una depuración la JEP ha identificado 4.439 víctimas entre 2002 y 2008.- Territorios priorizados: Catatumbo, Norte del Cesar, Casanare, Antioquia, Meta y Huila.- 397 víctimas se han acreditado dentro del Caso 03, conocido como el de “falsos positivos”- En el desarrollo de este caso se han realizado 220 versiones (172- presenciales, 48 – escritas)- Los generales que ya están compareciendo ante la JEP: han rendido versión 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), 10 oficiales con rango de Mayor y 7 de rango de coronel. <p>Por último, gracias a los avances del caso, la JEP logró exhumar 54 cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeida (Antioquia). Esta labor fue realizada por el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).</p> <p>Finalmente, el Congreso de la Republica tiene la facultad de legislar sobre esta materia, toda vez que entre las funciones del congreso definidas en el artículo 150 de la Constitución Política esta la de “Interpretar, reformar y derogar las leyes”, en este caso rendir un homenaje a víctimas de crímenes de Estado. En forma concreta los autores manifestían que el proyecto apunta a resarcir en parte los daños causados a numerosas víctimas , no hay un dato concreto y según la postura ideologica las cifras cambian significativamente, observemos algunos datos. En el periodico El Heraldó, se informa que “Según la Fiscalía, los “falsos positivos” dejaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, aunque organizaciones civiles denuncian que los muertos por esa política pueden llegar a 5.000. En cuanto a procesados, van 5.626, de los cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles, entre otros. Actualmente hay 1.236 uniformados que tienen el beneficio de la libertad transitoria por ya haber sido condenados por la justicia ordinaria</p> <div><div></div><div>²¹ Ávila, C. (17 de Octubre de 2019). Madres de Soacha en la JEP: “Los militares no están diciendo la verdad”. <i>El Espectador</i>.</div><div>²² Idem</div></div>

<p>por estos crímenes y casi 5.000 expedientes están abiertos sobre ejecuciones extrajudiciales en los que se menciona a 18 altos oficiales del Ejército.”</p> <p>Hace un año el periódico The New York Time, señalaba que a Colombia ha vuelto el fantasma de falsos positivos, como se conoce en Colombia a las ejecuciones de civiles por parte de militares, que comenzaron en 1988, en el auge de la lucha contra la guerrilla. El Gobierno de Duque rechazó estos versiones del periódico nortamericano, pero es claro que en el presente gobierno se han vuelto a presentar estos hechos. Uno de los casos del asesinato propiciado por miembros de las Fuerzas Armadas fue el del ex guerrillero Torres.</p> <p>El tema de los falsos positivos ha sido recurrente entre las denuncias por violación de derechos humanos. Según el Herald “En 2008 se descubrió el “modus operandi” de los militares implicados, que consistía en atraer a jóvenes pobres, algunos discapacitados, con falsas promesas de trabajo para luego llevarlos a otras regiones del país en donde eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores. El escándalo le costó el cargo a cuatro generales ese mismo año, pero hasta ahora no hay ningún militar de ese rango condenado por estos asesinatos.</p> <p>El 18 de mayo el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo en el que denunció que el Ejército ordenó recientemente a sus soldados duplicar el número de criminales y rebeldes muertos. La publicación asegura que este año surgió un “patrón” de asesinatos sospechosos y encubrimientos, abriendo la puerta a “aliarse” con grupos criminales para obtener información que permita mejorar los resultados del Ejército contra grupos armados ilegales. Tras la publicación, el periodista del NYT Nicholas Casey y el fotógrafo colombiano Federico Ríos se vieron obligados a salir de Colombia por motivos de seguridad”. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, afirmó el 20 de mayo de 2019, “que no existe riesgo de que “civiles inocentes” mueran durante las operaciones militares”. Hecho que la realidad ha desmentido. Han muerto a manos de miembros del ejército y policía varios civiles entre 2018 y 2020. El 21 de este mes la Cancillería y el Ministerio de Defensa remitieron una carta al editor del NYT en la que pusieron en duda “la veracidad” de las versiones de oficiales que sirvieron como fuente para el artículo.</p> <p>Nuevamente la realidad ha sido otra, los asesinatos de civiles siguen presentándose. A raíz de una serie de acciones institucionales contra miembros de las fuerzas Armadas que denunciaron la continuidad de los falsos positivos, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advirtió el 22 de mayo de 2019 que “sería muy grave que hubiera retaliaciones contra los oficiales que se animaron a contar la verdad” al NYT. El caso es que del Gobierno Nacional se vio obligado a crear una “comisión presidencial independiente” que analizará las órdenes y documentos relacionados con las operaciones del Ejército. Defensores de Derechos Humanos señalan que la Corte Penal Internacional CPI, ha señalado el riesgo de impunidad por ejecuciones extrajudiciales en el país.</p> <p>Las evidencias sobre el caso de las madres de Soacha y otros falsos positivos han sido presentadas en un video de la JEP, que reportó que ha exhumado 54 cuerpos de posibles ‘falsos positivos’ en Dabeiba. La JEP ordenó presentar la versión al excomandante del Ejército, Mario Montoya, por ‘falsos positivos’. Otras entidades como la Fiscalía y miembros del ejército que se han acogido a</p>	<p>la JEP han denunciado otros hechos contribuyendo a la verdad, la justicia, la reparación y a las acciones de no repetición. Otros grupos de zonas Catatumbo, Cauca, Tumaco, Ocaña, Meta, Sur de Bolívar, Medellín y varios municipios de Antioquia y de otras regiones del país han denunciado otros hechos similares de falsos positivos y el país está en mora de adelantar una política de cero tolerancia con estos hechos que empañan la honra y la moral de las fuerzas militares y de Policía, ampliamente cuestionadas por otros hechos como la violación de menores de edad y el asesinato de jóvenes en las movilizaciones y protestas en el paro de noviembre de 2019 y del presente mes de septiembre de 2020.</p> <p>La postura que asume el Ministro de Defensa ante la denuncia de hechos de violación de derechos humanos, de permanente defensa de las Fuerzas Armadas y de desconocimiento de los sufrimientos y demandas de las víctimas, debe tener por parte del Congreso una contundente respuesta pues es claro que el país enfrenta una nueva oleada de crímenes de Estado que debe ser parada inmediatamente. Proyectos de esta naturaleza contribuyen a establecer la verdad histórica, responsabilizar a los miembros del Estado por las acciones contrarias a los derechos humanos, que se viene presentando en varios lugares del país y sientan las bases de una política clara de seguridad pero en el marco de la Constitución y Ley colombiana, que dicen que en Colombia no pueden haber ejecuciones extrajudiciales.</p> <h3>III. CONCLUSIONES</h3> <p>El Proyecto de Ley, hará que la nación se asocie y rinda homenaje público a la Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO) quienes han buscado la reivindicación de la verdad, la justicia social, reparación y garantías de no repetición. Además, dispone que el 20 de septiembre sea el día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Así pues, el Proyecto de Ley se justifica en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">En el marco del proceso de posconflicto y reconciliación en el cual se encuentra la sociedad colombiana, toma una especial importancia este tipo de proyectos de ley que buscan dignificar a las víctimas. La necesidad de adelantar iniciativas de memoria es relevante frente a la construcción de paz, para alcanzar la verdad, la justicia, reparación y garantizar la no repetición de estas acciones violentas que han recrudecido las desigualdades sociales en Colombia.La Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO), conformada por las madres y familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. La cual tiene como objetivo la exigencia de sus derechos a la verdad, justicia, reparación, justicia, reparación, garantías de no repetición y la dignificación de las víctimas, quienes fueron señalados injustamente como miembros de las guerrillas o paramilitares reportados como dados de baja por el Ejército Nacional.Casos como estos demuestran que las víctimas de las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” provenían de familias humildes con bajos recursos económicos que buscaban oportunidades laborales para apoyar a sus núcleos familiares.
<h3>IV. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS</h3> <p>Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019 que modificó el artículo 291 de la Ley 5 de 1992 “el autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar”.</p> <p>Atendiendo a lo dispuesto en la norma anteriormente citada, en el trámite de este proyecto podrán incurrir en conflicto de interés los congresistas que tengan parientes dentro de los grados de consanguinidad, afinidad o civil establecidos en el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019, que se encuentren relacionados con las decisiones judiciales sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.</p> <p>Bajo las anteriores consideraciones resulta conveniente y necesario que la Nación rinda público homenaje a la Fundación MAFAPPO, como garantía para la dignificación de la memoria de las víctimas, un aporte en la construcción de paz, las garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición, así como el respeto de los Derechos Humanos.</p> <h3>V. ARTICULADO PROPUESTO</h3> <p>PROYECTO DE LEY No. _____ DE 2020 SENADO</p> <p>“POR EL CUAL LA NACIÓN DECLARA EL 20 DE SEPTIEMBRE COMO DÍA CONMEMORATIVO DE LAS VÍCTIMAS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SE ASOCIA Y RINDE PÚBLICO HOMENAJE A LA FUNDACIÓN MADRES FALSOS POSITIVOS SUACHA Y BOGOTÁ (MAFAPO) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.</p> <p>El Congreso de la República de Colombia</p> <p>DECRETA:</p> <p>Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto declarar el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y vincular a la Nación para que se asocie y rinda público homenaje a la Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO) por su labor incesante en la conservación de la memoria, la paz, la justicia, reparación y no repetición.</p>	<p>Artículo 2°. Día Conmemorativo de las Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Declárese el 20 de septiembre Día Conmemorativo de las Víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, como un homenaje a la lucha, reconstrucción y mantenimiento de la memoria por parte de las madres y demás familiares de los hombres asesinados de forma sistemática e ilegítima por miembros del Ejército Nacional y presentados como falsos guerrilleros y/o paramilitares muertos en combate.</p> <p>Artículo 3°. Monumentos Homenaje. Se autoriza al Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y demás entidades que correspondan, erigir un monumento en homenaje a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Este representará la lucha contra la impunidad, el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la dignificación de la memoria de las víctimas.</p> <p>Parágrafo: El diseño del monumento, texto de la placa y el lugar de instalación será concertado con la Fundación MAFAPPO, su presentación será en acto público y ceremonia especial. En la placa se incluirá el nombre de cada una de las víctimas.</p> <p>Artículo 4°. Orden de la Democracia. Confiárase la condecoración de la Orden de la Democracia-Simón Bolívar por parte de la Cámara de Representantes y el Senado de la República a la Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO), para rendir público homenaje a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” y a sus madres y familiares quien han luchado por la reconstrucción de la memoria, la construcción de la paz y la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.</p> <p>La condecoración será entregada en una ceremonia especial en las instalaciones del Congreso de la República, en la fecha, lugar y hora programadas por las Mesas Directivas del Congreso de la República.</p> <p>Artículo 5°. Homenaje. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión, según corresponda, garantizarán la disposición de los recursos necesarios para que se encargue a la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), la producción y emisión de una serie documental que resalte la historia vida de cada una de las Madres y familiares que integran la Fundación MAFAPPO, así como su proceso en búsqueda del esclarecimiento de la verdad.</p> <p>El proceso relacionado con la producción y divulgación de la serie documental será concertado y aprobado por la Fundación MAFAPPO. Se velará por brindar todas las garantías que eviten una revictimización.</p> <p>Artículo 6°. Autorización. Autorícese al Gobierno nacional para que en cumplimiento de los artículos 341 y 345 de la Constitución Política de Colombia incorpore en el Presupuesto General de la Nación las partidas necesarias para llevar a cabo las acciones referidas en la presente ley.</p>

<p>Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.</p> <p>VI. PROPOSICIÓN</p> <p>En atención a lo expuesto anteriormente, se presenta PONENCIA POSITIVA y se solicita respetuosamente a la Comisión Segunda Constitucional permanente dar primer debate en Senado al Proyecto de Ley No. 169 de 2020 – Senado: <i>“Por el cual la nación declara el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se asocia y rinde público homenaje a la Fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO) y se dictan otras disposiciones”</i></p> <p>De las senadoras y senadores,</p> <div><div><p>ANTONIO SANGUINO PAEZ Senador de la República Ponente Coordinador</p></div><div><p>BERNER ZAMBRANO ERASO Senador de la República</p></div></div>	<p>INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 08 DE 2020 SENADO</p> <p><i>por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia.</i></p> <p>Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2020</p> <p>Señor MIQUEL ANGEL PINTO Presidente Comisión Primera Senado de la República Ciudad</p> <p>REF: PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NO. 08 DE 2020 SENADO</p> <p>Asunto: Informe de ponencia para segundo debate senado</p> <p>Respetado señor Presidente:</p> <p>Atendiendo la designación del Presidente de la Comisión Primera Constitucional permanente del Senado de la República como ponente, y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, me permito rendir Informe de Ponencia Positiva para Segundo Debate en Senado (Primera Vuelta) al proyecto de acto legislativo del asunto.</p> <p>Adjunto a la presente la ponencia en original, dos copias y copia electrónica</p> <p>Cordialmente,</p> <div><p>Iván Leónidas Name Vásquez Senador de la República Alianza Verde</p></div>
<p>INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL ACTO LEGISLATIVO NO. 08 DE 2020 SENADO</p> <p>“Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia.”</p> <div><div>1. SÍNTESIS DEL PROYECTO</div><p>Para el ser humano¹, el agua es uno de los componentes más importantes del ambiente, ya que la materia viva de su cuerpo está compuesta aproximadamente por un setenta por ciento de dicho líquido, de tal manera que la ausencia de este puede afectar seriamente la salud y la vida de las personas. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el agua es un bien escaso y finito², ya que no existe proceso químico o físico alguno que permita crearlo, por lo cual, la disciplina jurídica ha venido diseñando especiales mecanismos para su protección, en particular para garantizar el abastecimiento por parte de la población, considerando el agua en algunos casos específicos como un derecho humano.</p><p>Con el objeto de precisar y fortalecer el derecho humano al agua, esta iniciativa legislativa pretende establecer “el agua como derecho fundamental, dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia” teniendo en cuenta que el agua es un elemento indispensable para la vida y por ello tanto todos los seres humanos deben para tener una vida en condiciones de dignidad un acceso a la misma.</p><p>Como resultado de ello, el Estado está en la obligación de velar por su conservación y desarrollo sostenible y garantizar a la población el acceso al agua para atender sus necesidades básicas.</p><p>Es importante destacar, que en la Constitución Política colombiana existen cuatro disposiciones de las cuales se desprende que el derecho al agua tiene rango constitucional, sin embargo, no hay un precepto expreso y específico destinado a consagrar en forma inequívoca el derecho al agua como un derecho individual, contrario a lo que sucede con otros derechos como “el derecho a la vida” o “el derecho al trabajo”. Ciertamente, el artículo 49 consagra la garantía del saneamiento. De igual forma, el artículo 79 determina el derecho a gozar de un medio ambiente sano y el artículo 366 consagra el mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la solución de las necesidades insatisfechas en materia de saneamiento ambiental y agua potable. Tales normas no pueden desarrollarse y</p><p><small>¹ Siguiendo en estas líneas textualmente a Gómez-Rey, A. y Rodríguez, G. El derecho fundamental al agua. Desde el derecho ambiental y los servicios públicos domiciliarios. Legis Editores, Bogotá, 2013.</small></p><p><small>² Debemos manifestar que se trata de un recurso que está sujeto a desgaste como consecuencia de su uso.</small></p></div>	<p>materializarse sin la presencia del recurso hídrico, pero tampoco definen ni establecen en qué consiste el núcleo duro del derecho fundamental al agua y cuáles son los bienes jurídicamente protegidos con este derecho³. Así mismo, se encuentra el artículo 93 que se refiere al bloque de constitucionalidad, mediante el cual se entienden incorporados -en el ordenamiento jurídico colombiano- aquellos tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. De especial relevancia resulta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual no estipula el derecho al agua en forma independiente o autónoma, aun cuando reconoce en su artículo 12 el derecho de las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, cuya realización no puede lograrse sin la disponibilidad de agua.</p> <div><div>2. TRÁMITE DEL PROYECTO</div><p>Origen: Congresional</p><p>Autores de la iniciativa:</p><p>Honorables Senadores: Angélica Lozano Correa, Antonio Sanguino, Wilson Neber Arias Castillo, Jorge Eduardo Londoño, Iván Marulanda, Iván Cepeda Castro, Pablo Catatumbo Torres, Gustavo Bolívar, Griselda Lobo, Juan Luis Castro, Iván Leónidas Name Vásquez, Sandra Ortiz Nova.</p><p>Honorables Representantes: Jairo Reinaldo Cala Suárez, María José Pizarro, Carlos Alberto Carreño Marín, Fabián Díaz Plata, León Fredy Muñoz, Cesar Ortiz Zorro.</p><p>Proyecto publicado: Gaceta del Congreso número 578 de 2020.</p><p>TRAMITE EN SENADO DE LA REPUBLICA 1º VUELTA</p><p>Ponente Primer Debate: H.S: Iván Leónidas Name Vásquez Fecha de Aprobación Primer Debate: 13 de Octubre de 2020</p><p>Ponencia Publicada: Gaceta del Congreso 811 de 2020</p><p><small>³ La fundamentalidad del derecho al agua en Colombia Disponible en línea, en https://revistas.uextamado.edu.co/index.php/derest/article/view/4341/5069</small></p></div>

<p>Este proyecto de acto legislativo fue aprobado sin modificaciones en la sesión de la Comisión Primera del Senado, el día 13 de Octubre de 2020.</p> <p>Durante la discusión del proyecto se radicarón cuatro (4) proposiciones presentadas por los Honorables Senadores Eduardo Emilio Pacheco, Roy Barreras, Carlos Eduardo Guevara y Esperanza Andrade. Dichas proposiciones fueron dejadas como constancias.</p> <div>3. COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN</div> <p>Conforme a lo expresado en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, el pasado 18 de agosto fui designado ponente en primer debate del Proyecto de Acto Legislativo No. 08 de 2020 “Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del título II de la Constitución Política de Colombia”.</p> <div>4. OBJETIVO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA</div> <p>Los objetivos concretos que persigue el Acto Legislativo No. 08 de 2020 Senado son:</p> <div><div>i) Delimitar, precisar el alcance y consagrar de manera expresa el derecho humano al agua, con prevalencia para el consumo humano y su función ecológica, como un derecho de protección constitucional, teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto.</div><div>ii) Acatar la orden emitida por la Corte Constitucional que indicó que el legislador posee la “obligación de expedir leyes dirigidas a la realización de los derechos fundamentales al agua y a un ambiente sano en todos los órdenes”⁴.</div><div>iii) Subsanan el déficit de protección al derecho al agua establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2016 en la que se pronunció sobre la protección de los ecosistemas de páramo y destacó que “existe un déficit normativo y regulatorio para cumplir con el deber constitucional de proteger las áreas de especial importancia ecológica, en este caso, los ecosistemas de páramo. Adicionalmente, el déficit de protección no sólo vulnera el derecho al ambiente</div></div> <p>⁴ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-220 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.</p>	<p>sano, sino que también compromete el derecho fundamental al agua debido a que se desconoce la obligación del Estado de proteger las áreas de influencia de nacimientos, acuíferos y de estrellas fluviales”.</p> <div>iv) Establecer que el Estado colombiano garantizará la protección, y recuperación de los del recurso hídrico. ecosistemas</div> <p>Para el cumplimiento de dichos objetivos, el artículo 11 A reconoce: i) el derecho fundamental al agua de todas las personas en el territorio nacional, ii) el derecho al agua en condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad conforme al principio de progresividad iii) el uso prioritario del agua para consumo humano, sin detrimento de su función ecológica y iv) el deber del Estado de garantizar la protección y recuperación de los ecosistemas del recurso hídrico.</p> <div>5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE LEY</div> <p>En el marco del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el año 2002 su Comité promulgó la Observación General No. 15⁵, en la cual se delimitó el concepto y contenido del derecho humano al agua, en adelante, DHA.</p> <p>Teniendo en cuenta la fecha de expedición de la Observación, el ordenamiento jurídico colombiano en ese momento no contemplaba mención alguna sobre el concepto y los componentes del derecho humano al agua. Razón por la cual no se encuentran normas especiales y expresas (o un cuerpo normativo propio) que lo comprenda.</p> <p>No obstante, a partir de la jurisprudencia constitucional y otros mecanismos⁶, este derecho ha venido siendo incluido en nuestras normas, y de hecho, actualmente se encuentra adscrito a la Constitución Política⁷, la cual irradia el resto del ordenamiento jurídico colombiano. Tanto así, que la Corte Constitucional ha dicho que el legislador posee la “obligación de</p> <p>⁵ Sobre este particular véase: CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-764 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.</p> <p>⁶ Que serán descritos adelante.</p> <p>⁷ La vinculación del derecho humano al agua a la Constitución Política proviene de la expresa mención realizada por la jurisprudencia constitucional, en la cual se ha manifestado que en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace parte del bloque de constitucionalidad. Entendiendo adicionalmente que como el Pacto hace parte del bloque de constitucionalidad y el Comité a través de sus observaciones generales interpreta de manera oficial el pacto, lo dicho por este organismo también estará vinculado al ordenamiento por lo dispuesto en los Artículos 93 y 94 de la carta.</p>
<p>expedir leyes dirigidas a la realización de los derechos fundamentales al agua y a un ambiente sano en todos los órdenes”⁸.</p> <p>Con el objeto de fortalecer la protección del derecho al acceso al agua como recurso natural, esta iniciativa pretende establecer el agua como derecho fundamental, dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia, teniendo en cuenta que el agua es un elemento del que deben gozar todos los seres humanos de esta y las generaciones futuras. Como resultado de ello, el Estado está en la obligación de velar por su conservación y desarrollo sostenible y garantizar a la población el acceso para atender sus necesidades básicas.</p> <p>Una manera efectiva para proteger y garantizar la sostenibilidad de su uso es darle categoría de derecho fundamental, equiparándola a una norma no negociable y poniéndola por encima de los modelos económicos de mercado y los intereses particulares y haciendo énfasis en su carácter de recurso de carácter estratégico para el desarrollo económico, social, cultural y fundamental para la existencia del ser humano.</p> <p>En la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo se hizo referencia a documentos científicos y de organizaciones internacionales que ponen de presente la magnitud de la importancia de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para la supervivencia de la especie y la conservación de la vida a escala planetaria.</p> <p>No cabe duda entonces de la trascendencia que el acceso al agua tiene para la garantía de la calidad de vida, actual y futura, para los seres humanos, como también de su utilidad para el desarrollo de actividades económicas, culturales y recreativas. Sin embargo, debe quedar claro el orden de prioridades, de manera que en la gestión del recurso siempre prevalezca su aptitud para el consumo en actividades humanas sobre su utilización para actividades económicas, y de allí la conveniencia de elevar su acceso a la condición de derecho fundamental.</p> <p>Ya en el orden interno el acceso al agua es catalogado como un servicio público esencial, cuyo aseguramiento prestacional corresponde a los municipios, pero esa catalogación es insuficiente, si se atiende a lo previsto en instrumentos internacionales que lo categorizan</p> <p>⁸ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-220 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.</p>	<p>como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.</p> <p>Por ello, frente a la posibilidad del uso del agua para la explotación de recursos naturales, desde el derecho internacional y el derecho interno se han promovido una serie de políticas de planificación dirigidas a la protección ambiental y de la biodiversidad, en armonía con el aprovechamiento de los recursos naturales, en el marco de la función ecológica de la propiedad, el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente, y de conformidad con los tratados internacionales que en materia ecológica se han ratificado.</p> <p>No obstante, al concretar los mecanismos de uso del recurso para la explotación de los recursos naturales, la modalidad retributiva establecida en las concesiones ha derivado en un resultado perverso, consistente en que el que contamina paga, desconociendo la obligación que tiene el Estado de garantizar la plena disponibilidad del recurso tanto para la supervivencia humana como para el desarrollo económico, social y cultural de los habitantes del territorio.</p> <p>Es indispensable, por consiguiente, no crear estrategias de sanción y de penalización a quienes contaminen, sino establecer las pautas necesarias para la prevención y mitigación de la contaminación medioambiental, dado que aquellas estrategias, expresadas en normas como los Decretos 934 de 2013 y 2691 de 2014 han ocasionado daños ambientales irreversibles, especialmente en las zonas de páramos y aquellas afectadas por la explotación de recursos hidrocarbúricos. Considerando además que Decretos 934 de 2013 fue declarado nulo⁹ por el Consejo de Estado en el 2018, y el Decreto 2691 de 2014 fue suspendido provisionalmente por la misma corporación¹⁰.</p> <div>6. MARCO NORMATIVO</div> <p>Los artículos 93, 94 y 214 de la Carta Constitucional prevén un instrumento para integrar el derecho colombiano al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho</p> <p>⁹ Sentencia del 02 de Agosto de 2018 del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Rad. 11001032600020130016200 (49150).</p> <p>¹⁰ Auto del 25 de Junio de 2015 del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C. P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. 11001032400020150016300.</p>

<p>Internacional Humanitario. Se trata del bloque de constitucionalidad, compuesto por normas y principios utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por haber sido integrados a la Constitución por mandato de la misma.</p> <p>6.1 INTERNACIONAL</p> <p>6.1.1. En el Derecho Internacional de Derechos Humanos</p> <p>En este cuerpo normativo se encuentra contemplado el derecho humano al agua de tres formas principales. De manera implícita, relacionada con otros derechos especiales y de manera autónoma y explícita como en la doctrina de las Observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.</p> <p>a) De manera implícita o indirecta¹¹ está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948¹², en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y otros, donde se expresa que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar y la alimentación; lo cual sin agua no es posible.</p> <p>b) Relacionada con otros derechos está en la Convención¹³ sobre los Derechos del Niño¹⁴, el cual expresa la necesidad imperante de los Estados de “combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”. Nótese que la norma expresa la obligación del Estado en términos de suministro, sin interesar la manera de realizarlo. Por lo tanto, se deberá garantizar de manera física la entrega del líquido a la población infantil.</p> <p>6.1.2 En las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.</p> <p>¹¹ Los que se presentan no son los únicos, véase igualmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Protocolo de San Salvador adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y más</p> <p>¹² Artículos 3 y 25.</p> <p>¹³ Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Está en el literal c) del artículo 24</p> <p>¹⁴ Véase en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm, consulta del 19 de mayo de 2012. 14:37.</p>	<p>Estas son las interpretaciones autorizadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre las cuales tres están relacionadas con el agua la número 15, la 12 y la 14.</p> <p>La Observación General no. 15, es tal vez el cuerpo más importante respecto del derecho humano al agua que nace en interpretación de lo dispuesto en los artículos 11 y 12¹⁵ del Pacto. Ésta, parte de una visión amplia del derecho a la vida digna donde el agua es una condición para la supervivencia de los seres humanos y ayuda a la realización de otros derechos del pacto como la alimentación, la vivienda, la educación y la cultura.</p> <p>Para su realización establece que se debe tener en cuenta:</p> <p>a) La utilización del principio de no discriminación e igualdad de tal manera que genere la obligación especial del Estado de eliminar las diferencias no justificadas en el acceso al agua apta para el consumo humano, con atención de aquellas personas de especial protección como los menores, los pueblos indígenas, los desplazados, los presos, entre otros.</p> <p>b) Debe existir una prelación en los usos del agua en donde los abastecimientos personales y domésticos deberán desplazar a los demás como industriales, prácticas culturales y otros.</p> <p>c) Se debe garantizar la seguridad de las condiciones salubres de las fuentes hídricas y eliminar la contaminación que presente un riesgo para el hábitat humano.</p> <p>Derivado de lo anterior, el derecho debe comprender: i) la disponibilidad, la continuidad y la suficiencia del recurso teniendo en consideración el clima, el trabajo, la ubicación geográfica de acuerdo con los lineamientos establecidos en por la Organización Mundial de la Salud. ii) la calidad vista en páginas anteriores, iii) la accesibilidad física, económica y no económica.</p> <p>6.1.3 En el Derecho Internacional Humanitario</p> <p>¹⁵ Artículo 11 1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. [...]Artículo 12. 1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”</p>
<p>En este cuerpo normativo se encuentra el derecho humano al agua relacionado con la defensa de bienes y personas protegidas en situación de conflicto, con el fin de limitar las conductas y medios militares¹⁶ de quienes participen en las hostilidades, lo cual comprende tres ópticas:</p> <p>Una bajo la cual se pretende la protección del medio ambiente incluido el recurso hídrico mediante restricciones a la utilización de “técnicas de modificación ambiental”¹⁷ con fines militares estratégicos; entre las cuales está el uso de armas biológicas o químicas, tóxicos, gases asfixiantes entre otros. Otra que responde al mantenimiento del derecho sobre personas intervinientes en el conflicto como los prisioneros¹⁸, a los cuales el Estado retenedor deberá suministrar agua potable y alimentos suficientes para el mantenimiento de su vida.</p> <p>Por último, aparece la protección bienes y personas relacionadas con el conflicto. Según el Protocolo Adicional a los Convenios de 1949 y otros, se prohíbe inutilizar y atacar obras indispensables para el mantenimiento de la población civil como las reservas de agua y las instalaciones para de ella surtirse. Lo cual será de vigilancia de los organismos de asistencia humanitaria.</p> <p>6.1.4 En el Derecho internacional público ambiental</p> <p>A partir de la publicación “la primavera silenciosa”¹⁹ que introdujo las bases de la ecología moderna, los Estados comenzaron a implementar una serie de medidas jurídicas para la protección del medio ambiente, que en materia internacional han hecho parte del derecho público.</p> <p>La protección de las aguas se ha presentado en diversos cuerpos, sin que esté necesariamente relacionada con el derecho que nos ocupa, ya que vigila y cuida el recurso hídrico <i>per se</i>, entre éstos se destacan:</p> <p>a) En la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo en 1972 se reconoció que las condiciones de vida</p> <p>¹⁶ Cuarto Convenio de la Haya de 1907, artículo 22 del anexo.</p> <p>¹⁷ O “todas aquellas que tienen por objeto alterar -mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales- la dinámica, la composición o estructura de la Tierra, incluida su biótica, su litosfera, su hidrosfera y su atmósfera, o del espacio exterior” Véase el artículo segundo de la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles (ENMOD).</p> <p>¹⁸ Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III), de 1949</p> <p>¹⁹ CARSON, Rachel. Silent Spring. Mariner Books, Boston. 2002.</p>	<p>adecuadas son un derecho humano, entre las cuales podemos incluir el acceso al agua apta para consumo.</p> <p>b) A su vez la declaración de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en 1977, estableció que en 1990 la humanidad debería contar con los servicios de agua y saneamiento, lo cual implicaba una serie de acciones positivas por parte de los Estados.</p> <p>c) La Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente de Naciones Unidas insistió sobre la importancia de asumir y enfrentar la escasez del agua, así como su utilización insostenible. A su vez proclamó por la consideración del recurso hídrico como un bien económico, finito y fundamental para la vida del hombre por tanto solicitó mecanismos de participación para la toma de decisiones sobre sus cuestiones.</p> <p>d) La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo como marco primario del Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible o Agenda XIX, el Convenio sobre Diversidad Biológica, Cambio Climático, la Declaración de Principio de los Bosques entre otros, vinculó la visión ambiental de los recursos naturales a los derechos humanos entendiendo por estos últimos la condición bajo la cual se desarrolla el hombre y la calidad de vida.</p> <p>e) La Agenda XIX establece a su vez que el suministro de agua dulce a la totalidad de la población acorde con sus necesidades básicas debe ser una meta global.</p> <p>f) En el derecho marítimo también encontramos las siguientes manifestaciones sobre la protección de los recursos hídricos que estarían relacionadas con la disponibilidad: la Convención de Naciones Unidas sobre los usos de los cursos de aguas internacionales de 1997, las Reglas de Helsinki de 1996 entre otros.</p> <p>g) En 2002, en Johannesburgo, mediante los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, se trataron como aspectos principales el acceso al agua potable y el saneamiento básico por cuanto representan un modo de calidad de vida sostenible. Por tanto, fue la oportunidad de adoptar compromisos ciertos y concretos en la ejecución de la Agenda XXI y en general del desarrollo sostenible.</p> <p>Adicionalmente, se planteó la necesidad de garantizarle a más de cien millones de personas que no cuentan con agua potable el DHA y proveerlos de igual manera del saneamiento básico adecuado. “En esta cumbre se refleja un consenso internacional en el sentido de considerar el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho fundamental.”²⁰</p> <p>²⁰ DEFENSORIA DEL PUEBLO. El Derecho Humano al Agua en la Constitución, la Jurisprudencia y Los Instrumentos Internacionales” PROSEDHER. Bogotá. 2005.</p>

Los artículos primero y segundo de la Constitución Política de 1991 disponen que Colombia es un Estado Social de Derecho y por ende reconoce, consagra y respeta los derechos y garantías de los ciudadanos, entre ellos el DHA. Más aun, es un fin esencial del Estado garantizar su ejercicio, mediante los servicios públicos domiciliarios³⁷ que son acueducto, alcantarillado, asco, gas y energía eléctrica, donde los dos primeros tendrán nuestra mayor atención.

En palabras de la Corte Constitucional “La realización y la eficacia sustantiva del Estado Social de Derecho se mide por la capacidad de éste para satisfacer, a través de la prestación de los servicios públicos, las necesidades vitales de la población, mediante el suministro de concretas prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la igualación de las condiciones materiales de existencia de las personas”³⁸

El sistema de prestación de los servicios permite que sean llevados a cabo tanto por particulares como por el Estado. En este sentido podrán prestarlo únicamente³⁹ las sociedades por acciones, las organizaciones autorizadas, las empresas industriales y comerciales del Estado y los municipios de manera directa⁴⁰ cuando no exista particular dispuesto a hacerlo.

7. ALCANCE DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO

7.1 Acceso al agua como derecho fundamental.

Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentados por la Organización de Naciones Unidas, concretamente el sexto objetivo es “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible”. Para la Organización de Naciones Unidas “el agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir” y “hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño”.

La protección del recurso hídrico es una necesidad urgente a nivel global. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) “para 2050, al menos una de cada cuatro personas

³⁷ Son domiciliarios por cuanto se entiende que deben llegar de manera efectiva a la residencia de las personas, lo cual tiene como excepción en acueducto: la venta de agua en bloque y la prestación por pilas públicas.
³⁸ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-636 de 2000, M.P. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
³⁹ Artículos 15 y 17 de la Ley 142 de 1994
⁴⁰ Los municipios podrá prestar los servicios siempre y cuando agoten el procedimiento descrito en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994.

probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce”⁴¹ . Este objetivo de desarrollo sostenible, junto con los otros 16 objetivos, son una base para la construcción de una paz sostenible en nuestro país.

El derecho al agua, cuyo contenido ha sido desarrollado por la Corte Constitucional de Colombia en reiterada jurisprudencia, es un derecho polifacético. Así, la Corte Constitucional ha mencionado que entre los derechos constitucionales relevantes en materia del agua “vale la pena al menos mencionar los siguientes: el (1) derecho a la vida, que se consagra como inviolable y (2) a que nadie será sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, (3) el derecho a la igualdad (“), (4) los derechos de las niñas y de los niños; (5) al saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del Estado; (6) a una vivienda digna; (7) el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y a que la comunidad participe en las decisiones que puedan afectarlo”⁴² .

En este sentido, las distintas dimensiones del derecho al agua podrían clasificarse en al menos dos grupos, la primera dimensión hace de este derecho una condición necesaria del derecho a la vida de los seres humanos, y todos los aspectos y garantías que se relacionan con esta dimensión: igualdad, derechos de las niñas y los niños, vivienda digna, etc. La segunda dimensión relaciona directamente el derecho al agua como recurso natural esencial del medio ambiente con el derecho a gozar de un ambiente sano. Ambas dimensiones quedan plasmadas en el texto de artículo 11 A que propone el presente proyecto de acto legislativo, pues no solo se establece que todo ser humano tiene derecho al acceso al agua sino y que su uso prioritario es el consumo humano sin detrimento de su función ecológica, con lo que se recoge la dimensión humana del derecho al agua, sino que, además, se establece que se trata de un recurso público esencial para el desarrollo social, ambiental, económico y cultural y que corresponde al Estado colombiano garantizar la protección, conservación, recuperación y manejo sostenible tanto del recurso como de los ecosistemas.

El derecho al agua ha sido definido por Naciones Unidas como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”⁴³ que comprende (i) el derecho a disponer, y a (ii) acceder a cantidades suficientes de agua, y, además, que el mismo sea (iii) de calidad “para los usos personales y

⁴¹ Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos Disponible en línea, en <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/>
⁴² Corte Constitucional, Sentencia T-028 de 2014.
⁴³ Decenio del Agua: El derecho humano al agua y al saneamiento. Disponible en línea en : http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

domésticos”. Por otro lado, como ya se mencionó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha indicado una serie de elementos necesarios para garantizar efectivamente el derecho al acceso al agua⁴⁴.Siguiendo nuevamente la doctrina nacional⁴⁵:

“De las definiciones propuestas se vislumbra que los principales elementos del derecho humano al agua son aquellos que permiten la vida en condiciones dignas por parte de los asociados.⁴⁶ El DHA posee tres tipos de obligaciones principales de acuerdo con lo dicho por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (siendo comunes a los derechos humanos): proteger, respetar y cumplir.

La obligación de proteger hace referencia al amparo del derecho frente a terceros que directa o indirectamente puedan afectarlo o disminuir su ejercicio. Por ende, se exige del Estado crear las medidas necesarias para su satisfacción, entre ellas, una normatividad que regule el comportamiento de las personas y, de esta manera, se impidan las posibles interferencias en el goce del derecho. En palabras de la Observación en cita, esta obligación implica “adoptar las medidas que sean necesarias y que, de acuerdo a las circunstancias, resulten razonables para asegurar el ejercicio de esos derechos e impedir la interferencia de terceros”.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha dicho que “esta obligación implica (i) la adopción de medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten de forma no equitativa los recursos de agua; (ii) demanda a los Estados impedir que terceros menoscaben el acceso físico en condiciones de igualdad y a un costo razonable a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables, cuando éstos controlen los servicios de suministro de agua; y (iii) exige la promulgación de legislación en aras de la protección y funcionamiento eficaz del sistema judicial con el fin de resguardar el goce del derecho al agua potable frente a afectaciones provenientes de terceros”⁴⁷.

⁴⁴ ONU. Observación general número 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
⁴⁵ Gómez-Rey, A. y Rodríguez, G. El derecho fundamental al agua. Desde el derecho ambiental y los servicios públicos domiciliarios. Legis Editores, Bogotá, 2013
⁴⁶ Como se ha venido planteando a lo largo del documento, el acceso al agua en condiciones de salubridad, ha sido entendido como un derecho fundamental, pues este permite la vida en condiciones dignas. Desde una perspectiva más amplia, el agua como elemento del ambiente también hace parte del derecho.
⁴⁷ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-188 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

Por su parte, la obligación de respetar, en palabras de Rodríguez, Lozano y Gómez⁴⁸, implica directamente al Estado en el compromiso de no interferir en el disfrute del derecho al agua, bien sea de manera directa o indirecta, incluso en lo relativo a las formas autóctonas de distribución del recurso hídrico. Esto comporta la proscripción de ataques a la infraestructura de suministro, lo que representa en algún grado una intersección con el catálogo de prohibiciones previsto por el derecho internacional humanitario. Por ende, comprende las siguientes prohibiciones dirigidas al Estado: i) inmiscuirse en las formas tradicionales y culturalmente adecuadas de las comunidades en su gestión comunitaria del agua; ii) realizar cualquier práctica que restrinja su acceso; iii) contaminar o permitir la contaminación del recurso; y iv) limitar el acceso a servicios, redes o infraestructura necesaria para el abastecimiento de las aguas⁴⁹.

Por último, la obligación de cumplir exige que el derecho sea reconocido en los mecanismos legales existentes y se traduzca y garantice a través de políticas públicas coherentes que permitan su pleno ejercicio. Para ello se requiere el cumplimiento de tres sub-obligaciones (facilitar, promover y garantizar) así descritas por el Comité en la Observación General No. 15:

“La obligación de facilitar exige que los Estados parte adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados parte también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de medios a su disposición”.

Efectuadas las anteriores precisiones, veamos entonces cada componente del derecho humano al agua:

7.1.1. Disponibilidad

Por disponibilidad se entiende, según el Diccionario de la Real Academia Española, la condición de estar lista para utilizarse, por ende, requiere que la cosa (en nuestro caso el

⁴⁸ RODRÍGUEZ, Gloria Amparo, LOZANO, Carlos y GÓMEZ REY, Andrés. La protección jurídica del agua en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Buñez, 2011.
⁴⁹ Se debe hacer la siguiente precisión: En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el agua en el marco del conflicto debe ser respetada por todos los actores. En el Derecho Internacional Humanitario es obligación del Estado no interferir, como bien podría serlo, destruir los páramos o las tuberías.

<p>agua) exista y se pueda usar. Teniendo en cuenta que el agua no se encuentra en todos los lugares de nuestra geografía nacional⁵⁰, será obligación del Estado diseñar los sistemas necesarios para su transporte a zonas que no cuentan con este líquido vital. Ahora bien, “que se pueda usar” requiere el cuidado de las aguas y el recibo de las mismas en cantidades suficientes y de manera continua, lo cual contempla los subcomponentes de la disponibilidad que son: sostenibilidad, continuidad y cantidad, que desarrollaremos a continuación.</p> <p>7.1.1.1. Disponibilidad como sostenibilidad</p> <p>La sostenibilidad de las aguas se garantiza a través de un ordenamiento jurídico dispuesto al cuidado, protección, preservación, conservación y recuperación de los recursos naturales. En Colombia ha sido regulado a través del derecho ambiental⁵¹ y es principalmente ejercido por las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental. Esto con el fin de garantizar a los habitantes del territorio nacional y aquellos venideros (principio de responsabilidad intergeneracional procedente de la Declaración de Río de Janeiro de 1992⁵²), la existencia del recurso en condiciones adecuadas.</p> <p>Sobre este punto, será entonces obligación del Estado⁵³ cuidar y proteger los recursos naturales de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 79 y 80 de la Constitución Política, ya que es “un bien jurídico constitucionalmente protegido, en el que concurren las siguientes dimensiones: (i) es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad</p> <p><small>⁵⁰ A manera de ejemplo en el Departamento de la Guajira.</small></p> <p><small>⁵¹ Sobre este particular debemos resaltar que el artículo del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (decreto Ley 2811 de 1974), reza en su artículo 9 que el uso de los recursos y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente para lograr su máximo provecho.</small></p> <p><small>⁵² En este sentido, existe un componente ético que implica responsabilidad no solo con las personas que actualmente tienen derecho. En consecuencia, el DHA debe garantizarse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de las generaciones presentes y futuras.</small></p> <p><small>⁵³ Aunque los particulares también poseen la obligación de cuidado. Véanse los artículos 79, 80 y 95 de la Constitución Política de Colombia.</small></p>	<p>directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección”⁵⁴.</p> <p>7.1.1.2. Disponibilidad como continuidad.</p> <p>La continuidad hace referencia a la regularidad con la cual se reciben las aguas. Esta frecuencia en el tiempo deberá permitir la satisfacción de las necesidades básicas (humanas y domésticas) de las personas.</p> <p>Así las cosas, “este subnivel obligacional insta al Estado a: (i) abstenerse de interrumpir o desconectar de manera arbitraria o injustificada los servicios o instalaciones de agua; (ii) regular y controlar eficazmente los servicios de suministro de agua; (iii) garantizar que los establecimientos penitenciario y servicios de salud cuenten con agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas; y (iv) asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes”⁵⁵.</p> <p>7.1.1.3. Disponibilidad como cantidad.</p> <p>La cantidad hace referencia al volumen de agua recibida por las personas, el cual deberá ser suficiente para el mantenimiento de la vida y la salud. Por ende, las personas requerirán agua para consumo directo o bebida, preparación de alimentos y alimentación, aseo personal y doméstico y saneamiento básico.</p> <p>Con relación a la disponibilidad como cantidad la Corte Constitucional ha señalado que, “el Estado está obligado, de acuerdo con este subnivel obligacional, entre otras cosas, a (i) abstenerse de privar a una persona del mínimo indispensable de agua; (ii) facilitar agua y garantizar el suministro necesario de agua a quienes no disponen de medios suficientes; y (iii) garantizar que todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada tengan acceso permanente a agua potable, a instalaciones sanitarias y de aseo, de eliminación de desechos y de drenaje”⁵⁶.</p> <p>Para lograrlo, se espera que el Estado adopte políticas públicas para promover el uso eficiente y el ahorro de agua⁵⁷, así como el efectivo cuidado del recurso hídrico a través de la interdisciplinaria rama del derecho ambiental.</p> <p><small>⁵⁴ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-632 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.</small></p> <p><small>⁵⁵ Ibidem.</small></p> <p><small>⁵⁶ Ibidem.</small></p> <p><small>⁵⁷ Adelante se observará como este punto ha sido aharcado por el derecho ambiental al contemplar la obligación de realizar programas para el uso eficiente y ahorro del agua.</small></p>
<p>7.1.2. Accesibilidad</p> <p>La accesibilidad, de manera general implica tener en cercanías mediatas del hogar, lugar de trabajo, estudio o desenvolvimiento personal bien sea el agua o las instalaciones necesarias para su abastecimiento. Lo cual a su vez requiere que se haga sin discriminación alguna y con el acceso a la información suficiente. A su vez, la accesibilidad posee dos aspectos primordiales, el físico y el económico, que serán desarrollados a continuación.</p> <p>7.1.2.1 Accesibilidad física</p> <p>Dejaremos que la Corte Constitucional explique el componente así: la accesibilidad física hace referencia a que el agua y las instalaciones de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. En esta medida debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Además, los servicios e instalaciones de agua deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, al ciclo vital, a la cultura y a la intimidad⁵⁸.</p> <p>Para este alto tribunal, las principales obligaciones por parte del Estado son: (i) garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y para prevenir las enfermedades; y (ii) garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar.</p> <p>Aunado a lo anterior, el Estado también está obligado, de acuerdo con este subnivel obligacional a: (iii) abstenerse de limitar el acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o destruirlos como medida punitiva; (iv) abstenerse de generar obstáculos que impliquen la inexistencia de los servicios públicos domiciliarios o impidan su prestación; (v) adoptar medidas para velar por que las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de conservación; (vi) proporcionar o asegurar que los desplazados internos disfruten de libre acceso al agua potable; (vii) adoptar medidas para impedir que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad; (viii) velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua; (ix) adoptar medidas para velar por que se suministre agua salubre suficiente a los grupos que tienen dificultades físicas para acceder al agua, como las personas de edad, las personas con discapacidad, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en</p> <p><small>⁵⁸ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-188 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.</small></p>	<p>zonas propensas a desastres y las que viven en zonas áridas y semiáridas o en pequeñas islas; (x) facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas; y (xi) brindar a las personas que no pueden acceder a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado los medios y condiciones adecuados para que satisfagan ellas mismas sus necesidades básicas⁵⁹.</p> <p>7.1.2.2. Accesibilidad económica o asequibilidad</p> <p>La asequibilidad, a su vez, hace referencia a que el agua o las actividades necesarias para su distribución puedan ser sufragadas por las personas en términos económicos, es decir, que sea posible pagar por ellas sin comprometer, amenazar o poner en peligro otros derechos como la alimentación, la educación, la vivienda, entre otros.</p> <p>Al respecto, la Corte Constitucional⁶⁰ ha señalado que “el subnivel obligacional de accesibilidad conmina al Estado a: (i) abstenerse de efectuar aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio del agua; (ii) abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad; (iii) impedir que terceros menoscaben el acceso físico en condiciones de igualdad y a un costo razonable, a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables; (iv) establecer un sistema normativo para garantizar el acceso físico al agua en condiciones de igualdad y a un costo razonable, que prevea una supervisión independiente, una auténtica participación pública y la imposición de multas por incumplimiento; (v) velar por que el agua sea asequible para todos; (vi) adoptar las medidas necesarias para que el agua sea asequible, se sugieren: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas. b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo. c) suplementos de ingresos; y (vii) garantizar que todos los pagos por suministro de agua se basen en el principio de equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos”.</p> <p>7.1.2.3. No discriminación</p> <p>De acuerdo con el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos toda persona tiene los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esto quiere decir que todas las</p> <p><small>⁵⁹ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-188 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.</small></p> <p><small>⁶⁰ Ibidem.</small></p>

<p>personas tienen el derecho a estar libres de discriminación, así como de otras garantías como el DHA.</p> <p>El derecho a la no discriminación implica entonces, la exclusión, restricción o preferencia por dichos motivos o por cualquier otra condición que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce completo del DHA y en especial, el derecho a altos índices de salud y de la calidad del agua, además del acceso y la disponibilidad de dicho recurso.</p> <p>Bajo los anteriores preceptos, el grado de importancia del DHA hace que éste sea reconocido a toda persona, sin excepción alguna. Es decir, las condiciones subjetivas de género, raza, religión, sexo, opción política, estratificación socioeconómica y otras no deben ser tenidas en cuenta al momento de garantizar el suministro y abastecimiento del agua. En palabras de la Observación General No. 15, “el agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos internacionalmente”.</p> <p>De aquí, que se espera un especial interés en la garantía del derecho al agua por parte de la población históricamente discriminada como la que habita la ruralidad, los refugiados, los desplazados y los pueblos indígenas.</p> <p>7.1.2.4. Acceso a la información y participación</p> <p>La participación es el derecho que tienen “(...) <i>todas las personas a conocer, intervenir e incidir en las decisiones respecto de actividades, obras o proyectos que involucren sus intereses (...)</i>”⁶¹ y como deber tiene dos acepciones, la primera como “(...) <i>la obligación del Estado a respetar otros derechos tales como el derecho a ser escuchado, al debido proceso y a obtener respuesta por parte de la Administración(...)</i>”⁶²; permitir y desarrollar espacios idóneos para su desarrollo y ejecución; así como la obligación o deber de los ciudadanos a coadyuvar en la toma de decisiones que a todos nos interesa como el ambiente.</p> <p>La eficiencia de la participación está relacionada además con la información que es además un derecho fundamental. Dicho derecho “comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. Así se debe tener el derecho</p> <p><small>⁶¹ RODRÍGUEZ, Gloria Amparo y MUÑOZ AVILA, Lina Marcela. “La Participación en la Gestión Ambiental. Un Reto para el Nuevo Milenio”. Universidad del Rosario. Bogotá 2009.</small></p> <p><small>⁶² Ibidem.</small></p>	<p>de contar con sistemas de información adecuados y oportunos por medio de los cuales sea posible solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con el agua potable y el saneamiento básico”⁶³.</p> <p>7.1.3. Calidad</p> <p>Este componente hace referencia a las condiciones de pureza que debe mantener el agua para evitar afectaciones a la salud y la vida de las personas. De tal manera implica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que las aguas para consumo humano o doméstico cumplan con parámetros de salubridad, es decir, que no posean microorganismos o sustancias fisicoquímicas que puedan afectar la salud de las personas, incluidos los olores, sabores o colores que impidan su uso personal o doméstico.• El diseño y existencia de políticas públicas que permitan la medición o control de la calidad del agua, y• Que las descargas que se realicen a las aguas no contaminen las fuentes. <p>Para lograr garantizar la calidad, el Estado debe cumplir con las siguientes obligaciones: “(i) abstenerse de reducir o contaminar ilícitamente el agua; (ii) promulgar y hacer cumplir leyes que tengan por objeto evitar la contaminación y la extracción no equitativa del agua; (iii) garantizar a la población el suministro efectivo del servicio público de acueducto, con los niveles de calidad, regularidad, inmediatez y continuidad que exigen la Constitución y la ley; (iv) adoptar medidas para impedir que terceros contaminen o exploten en forma indebida los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de disposición de agua; (v) proteger los sistemas de distribución de agua de la injerencia indebida, el daño y la destrucción; (vi) adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados; (vii) velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas como componente de la higiene ambiental e industrial; (viii) garantizar que todos tengan acceso a servicios de tratamiento adecuados, para proteger la calidad de las reservas y recursos de agua potable; (ix) garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para garantizar la realización del derecho a la salud pública; (x) llevar</p> <p><small>⁶³ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-188 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.</small></p>
<p>a cabo el manejo y disposición de basuras bajo criterios técnicos que protejan el medio ambiente y preserven la salubridad colectiva”⁶⁴.</p> <p>En consecuencia, la calidad del agua debe permitir los siguientes usos: a) los personales, como el consumo humano, el saneamiento o evacuación de residuos orgánicos humanos; b) el lavado y aseo personal y doméstico; de ropa y accesorios personales, c) la conservación y preparación de alimentos; d) los vinculados como la producción de alimentos bien sea para explotación primaria o autoconsumo y aquellos que permitan evitar las enfermedades.</p> <p>7.2. Busca la disminución de impactos ambientales por el uso del agua en actividades productivas</p> <p>Es necesario implementar un verdadero modelo de desarrollo sostenible en Colombia en el que la protección ambiental sea un tema prioritario y que no desconozca el derecho internacional cuando se establezcan las líneas de crecimiento económico nacionales.</p> <p>Es indispensable no solo crear estrategias de sanción y de penalización a quienes contaminen, sino establecer las pautas necesarias para la prevención y mitigación de la contaminación medioambiental.</p> <p>7.3. No busca la gratuidad del Servicio Público</p> <p>Este Proyecto de acto Legislativo atiende la Observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el sentido en que debe atender a las condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad conforme al principio de progresividad. Con ello, se resuelve la inquietud frente al tema de la gratuidad y mínimo vital por las siguientes razones:</p> <p>La accesibilidad en sentido amplio implica que el agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte; y en sentido específico, la accesibilidad económica implica que los costos deben estar al alcance de todos y no ser un obstáculo. Por lo tanto, la accesibilidad no implica gratuidad ni implica la inexistencia de un costo por el servicio; lo que implica es que dicho costo cumpla con ciertas características.</p> <p><small>⁶⁴ CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-188 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.</small></p>	<p>Cabe anotar que de acuerdo con el estudio “Avance del derecho humano al agua en la Constitución, la ley, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales” de la Defensoría del Pueblo, en materia de accesibilidad económica es evidente que el abastecimiento de agua supone la existencia de costos directos e indirectos derivados del transporte, aducción, tratamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de líquido. Por ende, es claro que los costos no provienen del agua, sino de las actividades requeridas para su distribución en óptimas condiciones, y estos costos en ningún momento se desconocen en el presente proyecto.</p> <p>Adicionalmente, tal y como lo manifestó el DNP en el concepto enviado en el acto legislativo anterior que fue archivado, la asequibilidad desde el punto de vista de accesibilidad económica no indica un servicio gratuito. Ello por cuanto la ley es clara al consagrar como indebida competencia a la hora de prestar el servicio público de agua potable, la prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo.</p> <p>En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-041 de 2003 señaló que “el concepto de gratuidad de los servicios públicos ha sido abandonado en la Constitución Política de 1991 (artículo 367) y ha surgido en cabeza de los particulares, la obligación a contribuir en el financiamiento de los gastos en que incurra el prestador del servicio dentro de los criterios de justicia y equidad (artículos 95, 367, 368 y 369 C. P.). Por ende, el reconocimiento del derecho al agua como fundamental no implica que el servicio de acueducto deba ser gratuito para la población.</p> <p>Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y partiendo de la no gratuidad del servicio y de la existencia de unos costos asociados al mismo, es claro que al derecho al agua también le son aplicables los mandatos generales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con su aplicación. <u>Por lo tanto, debe haber una aplicación progresiva del derecho.</u></p> <p>Por lo tanto, para evitar interpretaciones erróneas y para que el Estado pueda responder a las obligaciones que se generan con el reconocimiento de este derecho se incluyó de manera explícita el principio de progresividad. También se hizo con el fin de reafirmar el pronunciamiento de la Corte en su sentencia T-760 de 2008 según el cual “Las obligaciones de carácter prestacional derivadas de un derecho fundamental son de cumplimiento progresivo, por la complejidad de las acciones y los recursos que se requieren para garantizar efectivamente el goce efectivo de estas facetas de protección de un derecho”.</p>

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.

El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales.

Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar Los <sic> derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva” (Negrillas fuera de texto).

9. CONFLICTO DE INTERESES – ARTÍCULO 191 LEY 5 DE 1992

Conflicto de Intereses – Artículo 291 Ley 5 de 1992 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 291 de la ley 5 de 1992, modificado por la ley 2003 de 2019, se indicarán las circunstancias o eventos que potencialmente pueden generar un conflicto de interés para los honorables congresistas que discutan y decidan el presente proyecto de acto legislativo.

Considero que bajo ninguna razón se constituye un conflicto de interés sobre algún parlamentario, toda vez que la presente reforma busca hacer modificaciones de orden institucional que afectan la consagración del agua como derecho fundamental, sin que por ella se constituya algún beneficio actual, directo y particular. Como ha señalado la Corte Constitucional, por regla general, los actos legislativos no constituyen conflictos de interés. Sobre este asunto, afirmó el tribunal constitucional en sentencia C-1040 de 2005:

*“la regla general es que no cabe plantear impedimentos o recusaciones por conflicto de intereses con motivo del trámite de una reforma constitucional; estas figuras únicamente son procedentes en casos excepcionales en los que aparezca claramente demostrada la existencia de un interés privado concurrente en cabeza de un miembro del Congreso. Como por regla general las reformas constitucionales afectan por igual a todos los colombianos, independientemente de su condición o no de parlamentario, es inusual que algún congresista se encuentre particularmente privilegiado o perjudicado por un acto legislativo, y que, por lo mismo, de él se predique un conflicto de intereses. No se deben confundir, de un lado, los intereses políticos -inevitables en el ámbito parlamentario y sobre todo cuando se trata de reformar la Constitución- los cuales pueden concurrir con los intereses generales, con los denominados intereses meramente privados que, de otro lado, si están excluidos por la figura del conflicto de intereses -tales como los intereses económicos particulares del congresista o los intereses meramente personales y subjetivos de orden no político-. De admitirse que los intereses políticos a favor o en contra de una reforma constitucional inhiben a los congresistas de participar en su tramitación, muchas normas de la Carta se tornarían irreformables o pétreas, como por ejemplo todas las normas sobre el Congreso de la República, las elecciones, los partidos, la relación entre el gobierno y la oposición y las entidades territoriales”*⁶⁵.

La aprobación del presente proyecto de acto legislativo sería un avance para la consolidación del Estado Social de Derecho, pues se avanza en las garantías mínimas con relación a los principios de progresividad de los derechos.

⁶⁵ Corte Constitucional De Colombia. Sentencia C-1040 De 2005. Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.

10. CONSIDERACIONES DEL PONENTE

Con la aprobación del primer debate del Proyecto de Acto Legislativo 08 de 2020 Senado se logró un importante acuerdo sobre la importancia de la presente iniciativa para la garantía del derecho fundamental al agua en el país. En el debate fueron presentadas diferentes proposiciones sobre el artículo primero, con el ánimo de mejorar el alcance y la redacción del presente proyecto, las cuales se presentan a continuación.

Autor	Proposición	Comentario
H.S. Eduardo Emilio Pacheco	Artículo 1°. Inclúyase el Artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución, el cual quedará así: Artículo 11 A. Todas <u>las</u> personas tienen derecho al agua, de acuerdo a los principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad, progresividad y sostenibilidad fiscal. Su uso prioritario es el consumo humano, para lo cual el Estado garantizará la conservación, protección y uso eficiente <u>de este recurso de conformidad a la constitución y normas sobre la materia.</u>	La redacción propuesta, en términos plurales va en armonía con otros artículos del Capítulo I del Título II de la Constitución por lo que será acogida en el texto de la ponencia. La conformidad con los demás artículos de la Constitución es propia del Estado Social de Derecho, siempre que sea respetada la supremacía constitucional, por lo que se hace innecesario y contrario a la técnica legislativa hacerlo explícito. Por lo cual esta modificación no será incluida en la ponencia.
H. S. Roy Barreras	Artículo 1°. Inclúyase el Artículo 11-A <u>76</u> de la Constitución Política <u>el Derecho al Agua</u> , así:	La propuesta de cambiar la ubicación del derecho al agua en la Constitución al capítulo de derechos

Artículo 76. Toda persona en el territorio nacional tiene derecho al agua <u>potable</u> , de acuerdo a con los principios de accesibilidad, calidad y disponibilidad, progresividad y <u>universalidad</u> sostenibilidad fiscal . Su uso prioritario es el consumo humano, para lo cual el Estado garantizará la conservación, protección y uso eficiente	colectivos, teniendo en cuenta que se trata de un derecho fundamental reconocido por la Corte constitucional desde sus inicios ⁶⁶ , no será incluida en la ponencia debido a que la positivización de un derecho ya reconocido por vía jurisprudencial, debe hacerse respetando el carácter fundamental de dicho derecho reconocido por la Corte Constitucional, y en consecuencia incluirlo en el capítulo de los derechos fundamentales. Sin embargo, en la proposición se incluye la inclusión del principio de universalidad en vez del principio de sostenibilidad fiscal, modificación que consideramos pertinente debido a que la sostenibilidad fiscal no puede ser una limitación a los derechos fundamentales ⁶⁷ , y el principio de universalidad corresponde con los
---	---

⁶⁶ Se puede observar en las sentencias T-578 de 1992, T- 140 de 1994 y T- 207 de 1995 y más recientemente en sentencias como la T-752 de 2011, T-541 de 2013 y T-028 de 2014.
⁶⁷ De acuerdo con el Parágrafo del artículo 334 de la Constitución y la jurisprudencia Constitucional que ha mencionado en Sentencia T – 028 de 2014, entre otras, que: “la obligación de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente para el uso personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate público y la ejecución presupuestal”.

		objetivos del presente proyecto. Igualmente se adopta el cambio de la palabra “a” por la palabra “con” por tener esta última una mejor redacción.
H.S. Carlos Eduardo Guevara Villabón	<p>Artículo 1°. Inclúyase el Artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 11 A. Toda persona en el territorio nacional tiene derecho al agua, de acuerdo a los principios de accesibilidad, calidad y disponibilidad, progresividad y sostenibilidad fiscal. Su uso prioritario es el consumo humano, para lo cual el Estado garantizará la conservación, protección y uso eficiente del recurso hídrico conforme al principio de participación en materia ambiental.</p> <p><u>Parágrafo. El Gobierno Nacional en el término que establezca la ley, creará y ejecutará en coordinación con las entidades territoriales, las estrategias de</u></p>	<p>Se considera acertada la inclusión del párrafo en este sentido debido a que corresponde con el objetivo 3° y 4° del presente proyecto de establecer que el Estado colombiano garantizará la protección, y recuperación de los del recurso hídrico. Ecosistemas y subsanar el déficit de protección de páramos y ecosistemas sensibles. Igualmente, se resalta su pertinencia debido a mejorar el alcance de dichos objetivos mediante la inclusión de esta obligación.</p>

	<p><u>conservación que garanticen la protección del recurso hídrico v de los ecosistemas.</u></p>	
	<p>Artículo 1°. Inclúyase el Artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 11 A. Toda persona en el territorio nacional tiene derecho al agua, de acuerdo a los principios de accesibilidad, calidad y disponibilidad, progresividad y sostenibilidad fiscal. Su uso prioritario es el consumo humano, para lo cual el Estado garantizará <u>propenderá</u> la conservación, protección y uso eficiente del recurso hídrico conforme al principio de participación en materia ambiental.</p>	<p>La redacción original que usa el vergo “garantizar” está pensada para que el artículo resulte armónico desde una perspectiva sistemática de la constitución, en el sentido guardar coherencia con los artículos 79 y 80 de la constitución. Adicionalmente, el verbo “propender” desconoce la eficacia del derecho fundamental al agua en su dimensión de la protección del recurso hídrico y los ecosistemas, por lo que se mantendrá el verbo garantizar.</p>

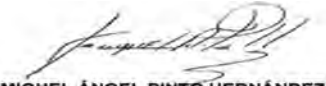

Teniendo en cuenta el anterior recuento de las proposiciones presentadas en el primer debate, además de la opinión del ponente respecto de estas, presentamos el pliego de modificaciones que será incluido en el texto propuesto en el presente informe de ponencia.

Texto Ponencia para Primer Debate	Modificaciones para Segundo Debate	Comentarios
Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de	Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de	Sin modificaciones.

la Constitución Política de Colombia”.	la Constitución Política de Colombia.	
<p>Artículo 1º. Inclúyase el Artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 11 A. Toda persona en el territorio nacional tiene derecho al agua, de acuerdo a los principios de accesibilidad, calidad y disponibilidad, progresividad y sostenibilidad fiscal. Su uso prioritario es el consumo humano, para lo cual el Estado garantizará la conservación, protección y uso eficiente del recurso hídrico conforme al principio de participación en materia ambiental.</p>	<p>Artículo 1º. Inclúyase el Artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 11 A. Todas <u>las</u> personas en el territorio nacional tiene derecho al agua, de acuerdo a <u>con</u> los principios de accesibilidad, calidad y disponibilidad, progresividad y <u>universalidad</u> <u>sostenibilidad</u> fiscal. Su uso prioritario es el consumo humano, para lo cual el Estado garantizará la conservación, protección y uso eficiente del recurso hídrico conforme al principio de participación en materia ambiental.</p> <p><u>Parágrafo. El Gobierno Nacional en el término que establezca la ley, creará y ejecutará en coordinación con las entidades territoriales, las estrategias de conservación que garanticen la protección del recurso hídrico y de los ecosistemas.</u></p>	<p>Se acogen parcialmente las proposiciones del senador Roy Barreras, respecto de la inclusión del principio de universalidad; del senador Eduardo Pacheco respecto de la redacción plural; y del senador Carlos Guevara, respecto a la inclusión del párrafo que busca la efectividad de la obligación de protección del recurso hídrico y los ecosistemas. Lo anterior, de conformidad con los comentarios hechos anteriormente por el ponente respecto de las proposiciones presentadas en el primer debate.</p>

<p>Artículo 2º. El presente Acto legislativo rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.</p>	<p>Artículo 2º. El presente Acto legislativo rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.</p>	Sin modificaciones.

<div><div>PROPOSICIÓN</div><p>Se solicita a la Plenaria del Senado dar segundo debate al Proyecto de Acto Legislativo No. 08 de 2020 Senado, por el cual se incluye el artículo 11 A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia, en el texto que se propone.</p><p>Cordialmente</p><div><p>Iván Leónidas Name Vásquez Senador de la República Alianza Verde</p></div></div>	<div><div>TEXTO PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE AL ACTO LEGISLATIVO NO. 08 DE 2020 SENADO</div><div>“Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia.” * * *</div><div>El Congreso de la República de Colombia</div><div>DECRETA:</div><div><p>Artículo 1º. Inclúyase el Artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución, el cual quedará así:</p><p>Artículo 11 A. Todas las personas en el territorio nacional tiene derecho al agua, de acuerdo con los principios de accesibilidad, calidad y disponibilidad, progresividad y universalidad. Su uso prioritario es el consumo humano, para lo cual el Estado garantizará la conservación, protección y uso eficiente del recurso hídrico conforme al principio de participación en materia ambiental.</p><p>Parágrafo. El Gobierno Nacional en el término que establezca la ley, creará y ejecutará en coordinación con las entidades territoriales, las estrategias de conservación que garanticen la protección del recurso hídrico y de los ecosistemas.</p><p>Artículo 2º. El presente Acto legislativo rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.</p><p>Cordialmente,</p><div><p>Iván Leónidas Name Vásquez Senador de la República Alianza Verde</p></div></div></div>
<div><div><p>Guillermo León Giraldo Gil Secretario General Comisión Primera H. Senado de la República</p></div><div><p>20-10-20. COMISION PRIMERA H. SENADO DE LA REPUBLICA. SECRETARIA COMISION. SESIONES VIRTUALES. Acorde al artículo 165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza por parte de la Presidencia y la Secretaría de esta célula legislativa, la publicación de este informe de ponencia para segundo debate.</p><p>Presidente,</p><div><p>MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ</p></div><p>Secretario General,</p><div><p>GUILLERMO LEÓN GIRALDO GIL</p></div></div></div>	<div><div>TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN PRIMERA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA</div><div>PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N° 08 DE 2020 SENADO</div><div>“POR EL CUAL SE INCLUYE EL ARTICULO 11-A DENTRO DEL CAPITULO I DEL TITULO II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA”</div><div>EL CONGRESO DE COLOMBIA</div><div>DECRETA</div><div><p>ARTÍCULO 1º. Inclúyase el Artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución, el cual quedará así:</p><p>ARTÍCULO 11 A. Toda persona en el territorio nacional tiene derecho al agua, de acuerdo a los principios de accesibilidad, calidad y disponibilidad, progresividad y sostenibilidad fiscal. Su uso prioritario es el consumo humano, para lo cual el Estado garantizará la conservación, protección y uso eficiente del recurso hídrico conforme al principio de participación en materia ambiental.</p><p>ARTÍCULO 2º. El presente Acto legislativo rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.</p><p>EN LOS ANTERIORES TERMINOS FUE APROBADO EL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N° 08 DE 2020 SENADO “POR EL CUAL SE INCLUYE EL ARTICULO 11-A DENTRO DEL CAPITULO</p></div></div>

<p>I DEL TÍTULO II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA", COMO CONSTA EN LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020, ACTA NÚMERO 20.</p> <p><u>NOTA: El Proyecto de Acto Legislativo fue aprobado sin modificaciones, es decir, en el mismo texto del proyecto original.</u></p> <p>Presidente,</p> <div> MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ</div> <p>Secretario General,</p> <div> GUILLERMO LEÓN GIRALDO GIL</div>	<div>CONTENIDO</div> <div>Gaceta número 1152 - Martes 20 de octubre de 2020</div> <div>SENADO DE LA REPÚBLICA</div> <div>PONENCIAS</div> <div><table><tr><td>Ponencia para primer debate en Senado del procedimiento del Proyecto de ley número 169 de 2020 Senado, por el cual la Nación declara el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se asocia y rinde público homenaje a la Fundación Madres Falsos Positivos Soacha y Bogotá (Mafapo) y se dictan otras disposiciones.....</td><td>1</td></tr><tr><td>Informe de ponencia para primer debate, texto propuesto y texto aprobado por la Comisión Primera al Proyecto Acto Legislativo número 08 de 2020 Senado, por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia</td><td>5</td></tr></table></div>	Ponencia para primer debate en Senado del procedimiento del Proyecto de ley número 169 de 2020 Senado, por el cual la Nación declara el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se asocia y rinde público homenaje a la Fundación Madres Falsos Positivos Soacha y Bogotá (Mafapo) y se dictan otras disposiciones.....	1	Informe de ponencia para primer debate, texto propuesto y texto aprobado por la Comisión Primera al Proyecto Acto Legislativo número 08 de 2020 Senado, por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia	5
Ponencia para primer debate en Senado del procedimiento del Proyecto de ley número 169 de 2020 Senado, por el cual la Nación declara el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se asocia y rinde público homenaje a la Fundación Madres Falsos Positivos Soacha y Bogotá (Mafapo) y se dictan otras disposiciones.....	1				
Informe de ponencia para primer debate, texto propuesto y texto aprobado por la Comisión Primera al Proyecto Acto Legislativo número 08 de 2020 Senado, por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia	5				